

# GUARDIANES DE LA TIERRA, DEFENSORES DE NUESTRO FUTURO

Nueva fase en la demanda  
insaciable de tierras

 Land  
Rights  
Now



**OXFAM**




# DERECHOS SOBRE LA TIERRA VULNERADOS.

Oxfam y otras organizaciones llevan advirtiendo desde el año 2009 de la insaciable demanda de tierras que existe a nivel global. Inversores de todo el mundo han adquirido millones de hectáreas de tierra para satisfacer la demanda de alimentos y biocombustibles o, simplemente, con fines especulativos. En muchas ocasiones, la compraventa de tierra se lleva a cabo a expensas de agricultores, pastores, pescadores, pueblos indígenas y comunidades que dependen de los bosques para vivir; las personas que más la necesitan y que mejor la pueden proteger.

El próximo mes se publicará un exhaustivo análisis de acuerdos de compraventa de tierras pactados que evidencia cómo, con la formalización de dichos acuerdos y la puesta en marcha de sus correspondientes proyectos, nos estamos adentrando en una nueva era y que, en los próximos años, seremos testigos de sus consecuencias. Hasta un 59% de estos acuerdos afectan a tierras comunitarias reclamadas por pueblos indígenas y pequeñas comunidades, lo que significa que son millones las personas damnificadas. Pese a ello, tan solo una pequeña parte de los acuerdos incluyó un diálogo real con las comunidades. Las probabilidades de que este conflicto se agrave son enormes.

La última campaña de Oxfam en defensa de los derechos sobre la tierra muestra ejemplos de lo que puede suceder si el conflicto se recrudece: mujeres en situación de exclusión, derechos vilipendiados, comunidades enteras desalojadas de sus hogares... Estamos ante el mayor ataque en la actualidad contra el medio ambiente y contra la identidad, los derechos, los medios de vida y la seguridad de pueblos de todo el mundo. Ellos no pueden permitirse perder esta lucha, y nosotros tampoco.

A photograph of a young girl standing in a village at night. She is holding a large, flaming torch that illuminates her face and the surrounding area. The background shows simple, dark buildings and a dark sky. The ground is uneven and appears to be a dirt path or a clearing. The overall atmosphere is one of a traditional or perhaps a protest-related activity.

Una niña garífuna en las calles de Vallecito, en Honduras. Estas tierras pertenecen a su pueblo desde hace siglos, pero ahora están amenazadas por las plantaciones de palma aceitera.



Esta nota informativa está dedicada a la memoria de Berta Cáceres y de otros activistas defensores de los derechos sobre la tierra que han muerto por la causa. Su propósito es difundir la lucha de Miranda, del pueblo garífuna al que pertenece y de otros miles de grupos comunitarios e indígenas por defender sus derechos sobre la tierra en todo el mundo.



Miriam Miranda (arriba) lidera la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) que defiende las tierras de las comunidades afro-hondureñas ante la explotación y el saqueo. En los últimos seis años, más de 100 activistas defensores de los derechos sobre la tierra han sido asesinados en Honduras, entre ellos Berta Cáceres, amiga cercana de Miranda. En 2015, Oxfam facilitó la participación de Miranda en las Reuniones de Primavera del Banco Mundial para presionar contra el apoyo de la institución a las plantaciones de palma aceitera que ocupan las tierras de su pueblo. Ese mismo año, OFRANEH fue galardonada con el US Food Sovereignty Prize por su lucha por reclamar el control de sus sistemas alimentarios.

“Sin nuestras tierras, dejamos de ser personas”, dijo Miranda cuando fue entrevistada. “Para nosotros, la lucha por nuestros territorios, nuestros recursos naturales y nuestros bienes comunes es

de vital importancia para preservar nuestra identidad como personas”.

Y añadió: “Quiero hablar del papel que desempeña la mujer en la defensa de la vida, la cultura y los territorios, en oposición al modelo de muerte que se hace más fuerte cada día. Estamos en primera línea frente a una avalancha de ataques. En Honduras, como en todo Latinoamérica, África y Asia, las mujeres están en primera línea de la lucha por nuestros derechos, contra la discriminación racial y por la defensa de nuestro entorno y nuestra supervivencia. Estamos en primera línea no solo con nuestros cuerpos, sino también con nuestra fuerza, nuestras ideas y nuestras propuestas. No solo damos a luz bebés. También ideas y acciones”.

“Si el problema es global, entonces necesitamos una respuesta global”.<sup>1</sup>

Gobiernos y poderosos intereses privados están privando a 2.500 millones de

mujeres y hombres de sus tierras.<sup>2</sup> Se trata del mayor ataque en la actualidad contra la identidad, los derechos, los medios de vida y la seguridad de pueblos de todo el mundo, y contra el medio ambiente.

En muchos países de todo el mundo se está llevando a cabo una campaña de terror y desplazamientos forzosos motivada por la codicia y amparada en la impunidad. Muchas personas están sufriendo ataques, recibiendo amenazas, siendo desalojadas a la fuerza, criminalizadas, engañadas o discriminadas, y viendo cómo se les niegan sus derechos.

Expertos de Global Witness están realizando un seguimiento de los asesinatos de activistas defensores de la tierra y el medio ambiente. En 2015, cada semana fueron asesinados más de dos defensores de la tierra o el medio ambiente. Casi la mitad pertenecía a comunidades indígenas.<sup>3</sup>

Gobiernos débiles o despiadados y mecanismos de préstamo cuestionables amparan los ataques a estos guardianes de tierras comunitarias. Grandes corporaciones (empresas mineras, madereras y agroalimentarias, y especuladores) se apropian de sus tierras.

El premio son los recursos que se encuentran tanto encima como debajo de la superficie: los bosques, los minerales, el agua y la propia tierra en sí.

Por cada éxito logrado en su batalla existencial por lograr reconocimiento y protección, los pueblos indígenas y otros grupos que dependen de tierras comunitarias sufren a diario demolidoras derrotas. Todo esto constituye un nuevo capítulo a añadir a una historia marcada por siglos de abusos que comenzaron con la primera colonización.

La mitad de la tierra del planeta está habitada por pueblos indígenas y pequeñas comunidades que son sus propietarios tradicionales. Sin embargo, estos carecen de derechos formales sobre el 80% de esta tierra que con frecuencia se considera, por tanto, libre para ser objeto de saqueo, normalmente bajo el pretexto del “desarrollo económico”. El 90% de la tierra rural de África está “sin documentar”. En el Perú, un área cinco veces el tamaño de Suiza no tiene reconocimiento oficial. En todo el mundo, la superficie gestionada o utilizada de forma colectiva es inmensa: dos veces la superficie de Brasil y Rusia juntos.<sup>4</sup>

Los beneficios que se lograrían garantizando los derechos sobre la tierra de estas personas son numerosos. Hacerlo contribuiría a proteger más de 5.000 culturas y 4.000 lenguas distintas, así como el 80% de la biodiversidad del planeta.<sup>5</sup> Investigaciones llevadas a cabo por el World Resources Institute muestran que la tasa de deforestación de tierras indígenas del Amazonas es al menos diez veces inferior a la tasa en el resto de la región.<sup>6</sup> Esta protección es crucial en la lucha contra el cambio climático. Los bosques en los que habitan los pueblos indígenas y las comunidades locales absorben 37.700 millones de toneladas de carbono<sup>7</sup>, lo que equivale a las emisiones anuales totales de CO<sub>2</sub> derivadas del uso de combustibles fósiles. Si no hacemos frente a los importantes cambios que afectan a estos bosques y garantizamos los derechos de quienes los protegen, resulta difícil creer que el mundo vaya a ser capaz de reducir

lo suficiente las emisiones como para compensar esta pérdida.

Se trata de una lucha entre personas en un mundo desigual en el que las tierras y los recursos sin proteger se consumen sin piedad.

El International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) apunta en su informe *El mundo indígena 2016*<sup>8</sup> que los pueblos indígenas de todo el mundo han visto “escasas muestras de progreso [socioeconómico]. En algunos casos se informa incluso de que la situación ha empeorado”. También señala que “la causa subyacente de la pobreza socioeconómica que acucia a muchos pueblos indígenas es su precaria situación en materia de derechos sobre tierras y recursos”.<sup>9</sup>

El IWGIA culpa especialmente a las grandes corporaciones agroalimentarias, las industrias extractivas y los promotores de infraestructuras. Tal y como apunta, los Gobiernos están tan deseosos de atraer a estos inversores que introducen “enmiendas favorables a las empresas en la legislación nacional que amenazan con menoscabar los derechos de los pueblos indígenas”. Oxfam añade a la lista de culpables los megaproyectos turísticos o energéticos, la especulación con la tierra y la industria del carbón.

En muchos casos, los Gobiernos sencillamente no actúan en el interés de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Los políticos ignoran la documentación y los registros que les otorgan derechos sobre la tierra, a menudo rechazan los catastros tradicionales y hacen que los procedimientos administrativos sean complicados e interminables. A pesar de que los derechos consuetudinarios sobre la tierra están consagrados en la legislación internacional, en la práctica son pisoteados con demasiada frecuencia y facilidad.

El término “tierra sin documentar” se ha convertido en un eufemismo de “disponible”. Así, pastores, ganaderos y las personas que dependen de los bosques para sobrevivir son considerados a menudo ocupantes ilegales o intrusos en sus propias tierras. La agricultura tradicional se tacha de subdesarrollada y poco productiva en lugar de valorarse como un método eficaz de gestión de la tierra.

Además, dado que los pueblos indígenas y comunidades locales a menudo viven

fuera de las estructuras mercantiles capitalistas dominantes, son “pobres” desde el punto de vista del dinero en efectivo. Por tanto, la mayor parte carece de poder en los sistemas económicos y políticos convencionales. La falta de titulación sobre la tierra se equipara erróneamente a la falta de productividad, derechos y, en última instancia, de existencia.

Los pueblos indígenas y las comunidades locales son tremendamente valientes y resilientes, pero a menudo deben afrontar obstáculos enormes. Oxfam trabaja en todo el mundo con organizaciones sociales y representantes de su lucha. Una lucha que no solo se está librando en países en desarrollo, sino también en países ricos como Estados Unidos, Australia, Noruega, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, India y Brasil donde numerosos pueblos indígenas también luchan por sus derechos. La campaña *Land Rights Now*,<sup>10</sup> que Oxfam ayudó a poner en marcha junto a centenares de organizaciones, tiene como objetivo llamar la atención sobre la crisis que afecta a la tenencia de las tierras tradicionales. La organización afirma: “Puesto que todos y todas nos beneficiamos, todos y todas deberíamos proteger y defender a estas personas y sus instituciones tradicionales que durante siglos ha preservado los ecosistemas”.<sup>11</sup>

La campaña hace un llamamiento para que en el año 2020 se haya duplicado la superficie de tierra reconocida como propiedad o bajo control de los pueblos indígenas y comunidades locales “como un primer paso”. Un primer paso que tendría una importancia crucial y cambiaría la vida de millones de personas.

De acuerdo con datos que la Land Matrix Initiative publicará próximamente, hasta el 50% de los principales acuerdos documentados desde el año 2000 afectan a tierras reclamadas por comunidades y pueblos indígenas. Estos acuerdos se están formalizando rápidamente para agilizar su implementación sobre el terreno, lo que significa que la lucha por los derechos sobre la tierra de las comunidades será aún más feroz en los próximos años. Los casos que Oxfam presenta en esta nota informativa reflejan perfectamente el agravamiento del conflicto que podemos esperar. Es hora de que veamos las amenazas a estas comunidades como amenazas para todo el mundo.

## CUADRO 1 FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y AGRAVAMIENTO DEL CONFLICTO: LAS CONSECUENCIAS DE LA INSACIABLE DEMANDA DE TIERRAS

El próximo mes, la Land Matrix Initiative (la más exhaustiva base de datos sobre acuerdos de transacción de tierra a gran escala acordados desde el año 2000) publicará su segundo informe de evaluación. Destacan dos conclusiones: la primera, que la gran mayoría (más del 75%) de los más de 1.500 acuerdos registrados son acuerdos contractuales: el triple de los registrados en el primer informe de evaluación de 2012. En 2016, casi el doble de dichos acuerdos se encuentra "operativo" en comparación con 2013. La insaciable demanda de tierras se está convirtiendo en una realidad sobre el terreno.

La segunda conclusión es que entre el 32% y el 59% de la superficie adquirida (incluyendo pastizales y zonas forestales) se atribuye a comunidades y pueblos indígenas, lo que podría implicar el desplazamiento de millones de personas.<sup>12</sup> Tan solo en el 14% de los casos analizados se llevó a cabo un proceso para obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas, en un 43% de los cuales la consulta se limitó a una única forma de participación.<sup>13</sup> Sin duda, las condiciones son idóneas para que en los próximos años se produzca un empeoramiento del conflicto por la tierra.

Afortunadamente, también se han realizado algunos progresos desde que Oxfam y otras organizaciones dieron la voz de alarma ante esta crisis. Entre los hitos logrados cabe destacar:

- Las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra de las Naciones Unidas adoptadas por Gobiernos, organizaciones empresariales, organizaciones de agricultores y ONG en 2012 y que constituyen la primera normativa internacional sobre tenencia de tierras.<sup>14</sup>
- La intensificación del debate con diversos Estados en torno a cómo se deben implementar,<sup>15</sup> estas directrices

voluntarias, entre ellos Francia,<sup>16</sup> Alemania, Vietnam y Estados Unidos<sup>17</sup>, que comienzan a analizar en detalle cómo regular las actividades de sus empresas internacionales.

- Las instituciones financieras de desarrollo, entre ellas el Banco Mundial y su brazo crediticio para el sector privado, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), están siendo objeto de cada vez más campañas de presión por parte de organizaciones de la sociedad civil en relación a sus inversiones en proyectos. El Banco Mundial ha adoptado una nueva norma relativa al principio de consentimiento libre, previo e informado aplicable cuando los proyectos afectan a tierras que pertenecen a pueblos indígenas. La IFC ha comenzado a abordar las brechas existentes en sus mecanismos de préstamo "a ciegas" a través de intermediarios financieros, aunque Oxfam y otras organizaciones continúan ejerciendo presión para lograr mayores progresos.<sup>18</sup> Mientras tanto, gracias a la presión de la sociedad civil, el nuevo Banco Asiático de Inversión en Infraestructura ya ha fijado una serie de salvaguardas relativas a la tierra que, en ciertos aspectos, son más sólidas que las del Banco Mundial.
- Tras una intensa campaña varios inversores, como algunos bancos holandeses<sup>19</sup> y australianos<sup>20</sup>, se han comprometido a aplicar políticas más estrictas en cuanto a la tierra. No obstante, su implementación continúa siendo el principal escollo.
- Se ha trabajado intensamente para convencer a las empresas de que su negocio se verá perjudicado si sus clientes son conscientes de su implicación en disputas por la tierra o de su falta de respeto por los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas.<sup>21</sup> Algunas empresas han escuchado estas advertencias y han incrementado su transparencia. Por ejemplo, a través de su campaña Tras la

marca, Oxfam ha contribuido a persuadir a Coca Cola, Pepsi, Nestlé, y Unilever para que exijan a sus proveedores que aborden la problemática de la tierra.<sup>22</sup>

- El Foro Anual sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha contribuido a hacer del impacto de las actividades privadas en los derechos de los pueblos indígenas una prioridad, publicó en 2012 un informe al respecto.<sup>23</sup> Próximamente publicará un nuevo informe en el que se centrará concretamente en el impacto de las cadenas de suministro de la industria de la alimentación y bebidas.
- Existe un creciente reconocimiento de los vínculos entre los derechos sobre la tierra y otras metas más amplias de desarrollo sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados en 2015 incluyen diversas metas relativas a los derechos sobre la tierra y, de forma específica, los derechos de las mujeres. El Acuerdo de París sobre cambio climático de 2015 también reconoce la importancia de los conocimientos y los derechos humanos de los pueblos indígenas. Además, se están formando nuevas alianzas entre quienes luchan para defender los derechos sobre la tierra y el movimiento contra el cambio climático, tal y como evidencian las protestas contra un oleoducto en Dakota del Norte, en Estados Unidos.<sup>24</sup>

Cerca de siete años después de que se desatara esta insaciable demanda de tierras, los derechos sobre la tierra han adquirido una mayor importancia en los círculos políticos, así como en el discurso político en diversos ámbitos. Pero la puesta en práctica de estas reformas políticas continúa siendo un importante obstáculo y, tal y como evidencian los nuevos datos de la Land Matrix Initiative y los casos recogidos en esta nota informativa, la lucha para defender los derechos sobre la tierra está entrando en una nueva fase, potencialmente más violenta y peligrosa. Ahora más que nunca se precisa voluntad política.<sup>25</sup>





## CUADRO 2 DESIGUALDAD Y DERECHOS SOBRE LA TIERRA DE LAS COMUNIDADES LOCALES Y PUEBLOS INDÍGENAS

La falta de reconocimiento formal de miles de millones de hectáreas de tierras comunitarias e indígenas es la otra cara de la desigualdad en el mundo. Se trata de tierras que quienes ostentan el poder saquean en busca de recursos. Bosques, terrenos y ríos explotados por un modelo económico que parte de las elecciones que hacemos como consumidores y que no es sostenible. No podremos combatir la desigualdad a menos que se reconozcan formalmente y se protejan los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas sobre estas tierras.

La desigualdad de poder en la tenencia de tierras afecta a la vida diaria de muchas personas. Las tierras comunitarias y las que tradicionalmente han pertenecido a pueblos indígenas son un componente fundamental de su bienestar que no se puede valorar

mediante simples indicadores de ingresos. La tierra está ligada a la identidad y al equilibrio vital, a las relaciones sociales, al bienestar subjetivo, al disfrute del patrimonio cultural, a las prácticas y las creencias y a un medio ambiente sano.<sup>26</sup>

Un estudio de las comunidades inuits de Canadá identificó la tierra, la cultura y la comunidad como factores clave en la protección de la salud mental y el bienestar de la juventud que, sin embargo, se ven afectados por un acceso limitado a la tierra.<sup>27</sup> Su pérdida y degradación también ha menoscabado el bienestar de las comunidades aborígenes australianas.<sup>28</sup> Podríamos comparar la destrucción y la desposesión de tierras al etnocidio. Abordar la desigualdad y la discriminación de estas comunidades precisa, por tanto, de un cambio

fundamental en los programas de desarrollo para abordar la problemática de los derechos sobre la tierra como una de sus causas subyacentes.

Tal desigualdad y discriminación también se traduce en la falta de oportunidades y servicios, especialmente para los pueblos nómadas o las comunidades en zonas remotas. Las estadísticas de ingresos revelan una disparidad entre las personas indígenas y quienes no lo son<sup>29</sup>, mientras diversos estudios evidencian que los pueblos indígenas tienen un menor acceso a asistencia sanitaria que las poblaciones no indígenas.<sup>30</sup> En muchas comunidades indígenas, la tasa de depresión está ligada a cambios culturales rápidos y a la exclusión, que tienen un efecto más pronunciado entre las personas jóvenes.<sup>31</sup>



# HONDURAS

“Las comunidades están siendo desalojadas de sus tierras y se está perdiendo su cultura debido al desarrollo del turismo”

Miriam Miranda, líder de la Organización Fraternal Negra Hondureña.



## En Honduras, miembros de la comunidad garífuna están siendo asesinados en aras del beneficio económico. Grandes empresas se están apoderando de las tierras de esta comunidad en la costa hondureña.

La líder garífuna Miriam Miranda es víctima de intimidaciones y amenazas de muerte por defender los derechos territoriales de su pueblo.

La tierra garífuna es idónea para la plantación de palma aceitera. Estos árboles producen aceite de palma, un ingrediente muy valorado presente en muchos productos que podemos encontrar en nuestros hogares, desde chocolatinas a jabón.

Para dar paso a las plantaciones de palma aceitera, los productores talan bosques enteros o utilizan terrenos anteriormente destinados a producir alimentos.

La costa del Caribe también está muy solicitada debido al crecimiento del turismo en Honduras. Sus aguas cristalinas son perfectas para los complejos hoteleros.

**De media, cada tres días un defensor de los derechos sobre la tierra es asesinado en el mundo.**

Recientemente, los garífunas comenzaron una campaña contra un programa del Gobierno dirigido a crear “ciudades estatuto” en sus tierras. Estas ciudades estarían gestionadas por empresas privadas conforme a sus propias normas que, lo más probable, estarían centradas en generar ingresos. Los garífunas temen que se acabe anteponiendo los beneficios a las personas.

En 2003, Miriam y su pueblo remitieron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Diez años más tarde, la Comisión remitió su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2015, la Corte determinó que las autoridades hondureñas eran “responsables de la violación de los derechos de propiedad colectivos y de falta de protección judicial”.<sup>32</sup>

Asimismo, la Corte ordenó al Gobierno de Honduras investigar los asesinatos de activistas defensores de los derechos de la comunidad garífuna y protegerla ante futuras amenazas. Sin embargo, a día de hoy, el Gobierno aún debe cumplir la sentencia.

Honduras ha sido el escenario de terribles crímenes contra quienes defienden los derechos sobre la tierra. El Gobierno debe cambiar esta realidad.

### ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?

Existen leyes bloqueadas en la Asamblea Legislativa que permitirían a los pueblos indígenas y comunidades locales rechazar o aprobar proyectos que afectan a sus tierras. Este principio es conforme con la normativa internacional que el Gobierno de Honduras suscribió, pero que aún no ha implementado. Estas leyes deben aprobarse y aplicarse.



# PERÚ

“Esta tierra es una herencia de nuestros padres. Ahora es nuestro momento, y pronto será el de la próxima generación. Pero vivimos sabiendo que, en cualquier momento, el Estado podría volver a conceder licencias sobre nuestro territorio a empresas petroleras”.

Teddy Guerra, líder indígena quechua de Nuevo Andoas.



## En las profundidades de la Amazonía del Perú, 2.000 kilómetros al sur de Honduras, el pueblo quechua está librando una larga batalla legal contra el Gobierno por la titulación de sus tierras.

El Perú tiene 28,2 millones de habitantes. Cerca del 14% (cuatro millones de personas, aproximadamente) pertenece a 55 pueblos indígenas diferentes. De estos, el 83% son quechuas. Muchos de ellos, como otras comunidades no indígenas, protegen sus tierras de forma colectiva. Se estima que 20 millones de hectáreas estén pendientes de reconocimiento formal por parte del Gobierno.

El Perú tiene una de las cinco áreas de bosque tropical más grandes del mundo, con 68 millones de hectáreas de bosque (que cubren el 70% de la superficie del país). Esto significa que sus bosques son fundamentales en la lucha global contra el cambio climático. De hecho, por este motivo, Alemania y Noruega han invertido recientemente millones de dólares en reducir la deforestación en el Perú.<sup>33</sup>

En la década de los setenta, las autoridades se apresuraron a explotar la considerable riqueza petrolera de la selva de la región de Loreto, proporcionando a las empresas derechos totales sobre tierras indígenas y sin tener en consideración a las miles de personas que las habitaban.

Las décadas de explotación petrolera, con débil regulación han tenido un impacto enorme. Los vertidos y las aguas con residuos tóxicos de las explotaciones petroleras han contaminado las tierras y los ríos quechua.

Este desastre medioambiental ha destruido medios de vida de los pueblos indígenas al provocar la muerte de parte de la fauna acuática y silvestre, y hacer inservibles vastas extensiones de tierras de cultivo. Y, lo que es aún peor, la exposición a sustancias químicas tóxicas ha generado importantes problemas de salud en muchos quechuas.

En 2015, tras décadas de protestas y duras negociaciones con las autoridades, los líderes indígenas consiguieron que el Gobierno NACIONAL se comprometiera a cumplir con la demanda de titulación colectiva de sus territorios.

Pero la consiguiente Acta de Lima no ha conseguido materializar todas las promesas hechas. Su aplicación se ha retrasado y las autoridades regionales de Loreto se niegan a otorgar derechos de propiedad a los quechuas por las tierras que ya han sido adjudicadas a empresas petroleras.

Sin titulación sobre estas tierras, para los quechuas esta acta carece de valor alguno. Las comunidades indígenas son conscientes y ya han emprendido acciones legales para recuperar sus tierras.

### ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?

El Gobierno peruano debe garantizar la devolución total y sin condiciones de sus tierras al pueblo quechua y a otras comunidades y otorgar compensaciones por los daños económicos y a la salud que han sufrido.



# AUSTRALIA

“En Australia, los Gobiernos parecen tener miedo de dar a los aborígenes derechos totales para tomar decisiones que afecten a sus tierras. Suponemos una amenaza porque nos hacemos oír y exigimos que se respeten nuestros derechos”.

Cissy Gore-Birch, miembro de la comunidad, Balangarra.



## En Australia, los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres han luchado durante muchos años para conseguir una vía jurídica que les permita obtener el reconocimiento legal de sus tierras ancestrales.

A pesar de la aprobación de la pionera Ley de Título Nativo de 1993, el proceso para proteger las tierras aborígenes resulta complejo y costoso.

Y, por si no fuera suficiente, funcionarios públicos han intentado socavar las disposiciones dirigidas a proteger los derechos sobre la tierra de los aborígenes.

Actualmente, el Gobierno de Australia Occidental trata de otorgar a uno de sus departamentos la autoridad para declarar de forma unilateral qué son y qué no son territorios aborígenes sagrados. Esta propuesta eliminaría cualquier opción de reclamación por parte del pueblo aborígen. Básicamente, abriría la puerta a que un miembro del Gobierno pudiera revocar el estatus de protección de muchos lugares con profundo significado espiritual.

Los aborígenes han reclamado más del 70% de las tierras de la región australiana de Kimberly conforme a la Ley de Título Nativo de 1993.

Las empresas mineras apoyan este cambio ya que, como es de suponer, permitiría a muchas expandirse mucho más fácilmente en territorio aborígen.

Como si la destrucción de muchos lugares sagrados no fuera suficiente, el presidente del Gobierno de Australia Occidental también ha anunciado planes para cerrar más de la mitad de las comunidades aborígenes ubicadas en zonas remotas mediante la suspensión de los servicios públicos.

No se ha consultado ni informado previamente acerca de estos planes a ninguna de las comunidades afectadas.

El desplazamiento de las comunidades aborígenes es un tema sensible y doloroso de la historia australiana. Se trata de una historia marcada por la colonización y la discriminación, y el trauma generado aún es patente hoy en día.

La justicia en materia de tenencia de tierras es un camino largo. Australia es un claro ejemplo de una nación rica que ha violado y socavado los derechos de los pueblos indígenas.

La organización aborígen Kimberly Land Council, de la región de Kimberly en Australia Occidental, lidera la oposición a estas políticas. A principios del próximo año, Australia Occidental celebrará elecciones, por lo que estamos en un momento crítico para impulsar un cambio.

### ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?

El Gobierno de Australia Occidental debe proteger los derechos sobre la tierra de los pueblos aborígenes proporcionando a estas comunidades servicios sociales básicos y oportunidades en sus tierras, y aprobando nuevas leyes sobre el patrimonio cultural que les otorguen mayor autoridad. El Gobierno nacional debe reconocer los derechos totales sobre la tierra de los pueblos aborígenes y no simplemente otorgarles “títulos nativos”.



# SRI LANKA

“Tenemos que ganar esta lucha para conseguir justicia, no sólo para nosotros mismos, sino para nuestras hijas e hijos”.

Rathnamali Kariyawasam, defensora de los derechos sobre la tierra.

**“Vinieron por la noche. Hombres armados y con máscaras prendieron fuego a los campos y las casas en las aldeas costeras de Shasthrawela y Ragamwela en Paanama (Sri Lanka) y ahora más de 300 familias se encuentran desplazadas”<sup>34</sup>**

Esto ocurrió en 2010. Seis años más tarde, las familias continúan desplazadas. Algunas personas, como Rathnamali Kariyawasam, han terminado buscando trabajo en otras granjas. Sin embargo, los exiguos salarios apenas llegan para comprar alimentos suficientes para sus familias y, mucho menos, para pagar la educación.

La increíble belleza de sus tierras les ha traído problemas. En 2009, tras finalizar la guerra civil, comenzaron a llegar los turistas, principalmente desde Europa y, especialmente, desde el Reino Unido y Alemania. El negocio del turismo se disparó.

La mayor parte de este desarrollo la gestionó el ejército. Tras desalojar las tierras de Paanama, levantaron vallas electrificadas en torno a las aldeas.

La supervivencia de más de 5.000 culturas de todo el mundo depende de tierras indígenas y comunitarias

Construyeron un hotel de lujo y un palacio de congresos.

Fueron las mujeres quienes lideraron la batalla legal, presentando reclamaciones ante la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka y organizando protestas. Rathnamali fue una de ellas.

En 2015, consiguieron una importante victoria. El recién elegido Gobierno ordenó la devolución de 140 hectáreas de tierra a la comunidad. Sin embargo, aún no se ha adoptado ninguna medida para aplicar esta decisión.

Los habitantes de Paanama se encuentran en un momento crítico. Si consiguen recuperar sus tierras, otras comunidades rurales de Sri Lanka en riesgo de ser desalojadas podrían exigir lo mismo. Esto también detendría la imparable destrucción medioambiental de la costa de Sri Lanka.

El turismo es un factor cada vez más notable en los acaparamientos de tierra. Se trata de un problema que afecta a muchas zonas costeras de todo el mundo que están siendo saqueadas, víctimas del turismo, y de donde se está desalojando a las comunidades pesqueras, poniendo en peligro sus culturas. Aunque el turismo puede ser una importante fuente de ingresos para millones de personas si se desarrolla de forma sostenible, también puede ser devastador para las comunidades y el medio ambiente si su avance se basa únicamente en la obtención de beneficios económicos.

## ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?

Las autoridades de Sri Lanka deben aplicar de forma inmediata la decisión del Gobierno del 11 de febrero de 2015 y devolver 140 hectáreas de tierra a los habitantes de Paanama. Los turistas no pueden ser cómplices en estos crímenes. El Gobierno de Sri Lanka debe tomar una decisión en firme y promover un turismo sostenible y justo.



# INDIA

“La tierra es nuestra vida”

Kandana Jani, miembro de la comunidad Kutia Kand Adivasi (Odisha).



**La Ley de Derechos Forestales aprobada en 2006 en la India tenía el propósito de proteger los derechos de millones de comunidades como la Kutia Kand Adivasi en Odisha, en el este del país.**

Kandana Jani, de 62 años y padre de cinco hijos, luchó para que, conforme a esta ley, se reconociesen los derechos sobre la tierra de su familia y de otras 50 familias de su comunidad.

Pero las autoridades locales, bajo el pretexto de llevar a cabo proyectos de reforestación, han comenzado a dar paso a rentables plantaciones de teca en las tierras que por derecho pertenecen a Kandana y su comunidad.

**Casi la mitad de los hogares rurales de la India obtienen los recursos que necesitan para vivir de tierras comunitarias o indígenas.**

La elevada demanda internacional de madera de teca para la fabricación de muebles, suelos y otros bienes comerciales ha hecho de esta una industria muy productiva. Sin embargo, la expansión de las plantaciones de teca tiene un alto precio para la comunidad kutia. Donde antes se cultivaban diversas plantas y alimentos y se protegía la biodiversidad de los bosques, ahora se lucha contra la expansión de estas plantaciones.

Sin los bosques, la comunidad corre el peligro de acabar desapareciendo. No obstante, Kandana y otros miembros de la comunidad no se han quedado de brazos cruzados, sino que han exigido al Gobierno que aplique la ley.

En 2006, con la Ley de Derechos Forestales, la India se convirtió en una nación líder en este ámbito al reconocer los derechos de las comunidades cuya forma de vida depende de los bosques. Pero los intereses económicos han minado esta ambición. La India debe convertirse de nuevo en un defensor líder de los bosques.

## ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?

El Gobierno de la India debe dejar de destinar tierras comunitarias a la agricultura industrial, la minería o proyectos de conservación mal planificados. Por el contrario, debe reconocer los derechos de los grupos tribales y las comunidades locales sobre sus tierras y aplicar adecuadamente la Ley de Derechos Forestales de 2006. Si esta se lleva a la práctica, se beneficiarán más de 150 millones de mujeres y hombres, y la mitad de los bosques del país.

# MOZAMBIQUE

“No me siento segura donde vivo ahora porque solo es un terreno prestado. Nuestra comunidad necesita un lugar donde vivir”.

Namonaro Koneliwa, agricultora del distrito de Gurue.



## A veces, los Gobiernos y las empresas afirman contar con la aprobación de las comunidades locales para la venta o puesta en marcha de un proyecto en sus tierras.

En el caso de la comunidad wacua, en Mozambique, todo aconteció de forma muy distinta.

Namonaro Koneliwa solía cultivar maíz, frijoles, bananas y mangos en sus tierras. Esto le permitía mantener a sus dos hijos y a ella misma.

En 2012, representantes de una empresa agroalimentaria industrial se reunieron con el líder de su comunidad. En menos de un mes, Namonaro y el resto de su comunidad lo habían perdido todo.

Obligarono a Namonaro, que no sabe leer, a firmar documentos en los que aprobaba la venta de su tierra. Nadie le explicó la situación. También le dolió mucho que el líder de su comunidad aprobara la venta de esa forma. Pero no tenía ningún documento que certificara la propiedad de sus tierras.

Por sus 10 hectáreas de tierra, la empresa le dio 400 dólares, una cantidad que, según Namonaro, ni siquiera cubría el valor de su casa.

Ella fue una de las 200 personas desalojadas y obligadas a abandonar su hogar. Ahora cultiva dos hectáreas de tierra pantanosa infértile que ha recibido en préstamo en otra parte del país. Con la escasa compensación que recibió, construyó una pequeña casa y ha intentado preparar el nuevo terreno para el cultivo.

Mozambique reconoce los derechos sobre la tierra comunitaria. El problema es que, tal y como sucede en otros países africanos, el proceso para obtener un certificado o título es muy largo y complejo, y las comunidades no reciben un apoyo adecuado que les permita, entre otras cosas, fortalecer los mecanismos intracomunitarios que obliguen a sus líderes a rendir cuentas.

El 90% de la tierra rural de África, que en su mayor parte está gestionada por comunidades, no cuenta con ningún título de propiedad. Esto está estrechamente ligado a los elevados niveles de pobreza.<sup>35</sup>

## ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?

Las autoridades locales y el Gobierno deben otorgar a las comunidades desplazadas títulos de propiedad de sus nuevas tierras para compensar las pérdidas derivadas de ventas forzosas. Asimismo, el Gobierno de Mozambique debe proteger los derechos sobre la tierra comunitaria y garantizar la puesta en marcha de mecanismos de rendición de cuentas intracomunitarios.





Petronila Sandi, que ha vivido toda su vida en Nuevo Andoas (Perú), defiende los derechos de su pueblo sobre la tierra.





Los derechos sobre la tierra no solo permiten a una persona poseer una parcela de terreno. Los derechos sobre la tierra permiten a una madre o a un padre cultivar alimentos suficientes para alimentar a su familia y vender en el mercado; permiten a las comunidades practicar sus tradiciones ancestrales y venerar lugares sagrados; permiten proteger bosques, ríos, costas y otros recursos ante la amenaza de Gobiernos sin escrúpulos y empresas codiciosas, y salvaguardar la naturaleza para las próximas generaciones.

Los derechos sobre la tierra son derechos humanos.  
Protejámoslos y protegeremos nuestro planeta.



**OXFAM**